



Luchas por la tierra, los bosques y la soberanía alimentaria



Brasil. Ph: WRM

Nuestra Opinión: Las comunidades campesinas y dependientes de los bosques unidas en sus luchas.....	3
República Democrática del Congo: Convirtiendo una vez más las tierras campesinas en monocultivos de palma aceitera.....	5
Camerún: Contestación de los lugareños sobre la Certificación ISO 14001:2004 de Socapalm.....	10
Cuenca del Congo: La tormenta que se viene.....	12
Uruguay: La amenaza de una tercer mega-fábrica de celulosa.....	17
Indonesia: La resistencia de lo sagrado en Bali contra la “revolución verde” y la industria del turismo.....	21
El proyecto REDD+ Envira en Acre, Brasil: promesas vacías galardonadas con nivel oro por los certificadores de carbono.....	25
Brasil: El cerrado y la ciudad de Três Lagoas bajo el control de las papeleras.....	29
ALERTAS DE ACCIÓN	
¡Exijamos a la Agencia Sueca de Energía que suspenda los pagos futuros a la empresa Green Resources y cancele la compra de créditos de carbono!.....	33
India: ¡No más desalojos de las reservas de tigres!.....	33

RECOMENDADOS

¿Quién nos alimentará?.....	33
Activistas finlandeses protestan contra las actividades de Stora Enso y Veracel en Brasil	33
¿De dónde viene todo el oro procesado en Suiza?.....	34

Este boletín cuenta con artículos escritos por la Asociación Nacional de Campesinos y Lugareños de Camerún (Synaparcam, por su sigla en francés) y Earthsight UK. Asimismo, las y los integrantes del secretariado internacional del WRM relatan sus experiencias y aprendizajes durante los trabajos de campo junto con organizaciones locales en Mato Grosso do Sul, en Brasil; en Bali, Indonesia; en Uruguay; en Kwilu, República Democrática del Congo y en Acre, Brasil.

Luchas por la tierra, los bosques y la soberanía alimentaria

Nuestra Opinión

Las comunidades campesinas y dependientes de los bosques unidas en sus luchas



Laos. Ph: Focus on the Global South/Anthony Gueguen

El 17 de abril de 1996 fueron asesinados 19 campesinos del Movimiento Sin Tierra en el estado de Pará, Brasil, en su lucha por la tierra. A raíz de este hecho, La Vía Campesina – el movimiento más grande que reúne a campesinas y campesinos de todo el mundo- fijó esta fecha como **la Jornada Mundial de la Lucha Campesina**. Un día para recordar, acentuar y movilizarnos contra **la persecución y violencia que las campesinas y campesinos sufren a diario a nivel mundial como resultado de las políticas neoliberales del sistema económico dominante**.

Desde el WRM, cada año nos unimos al llamado en solidaridad con las luchas por la tierra, los medios de vida y subsistencia y la autonomía de los pueblos.

A fin de cuentas, las luchas de las campesinas y campesinos están íntimamente relacionadas con las luchas de las comunidades dependientes de los bosques. **En muchos casos, las comunidades campesinas también dependen de los bosques y las comunidades dependientes de los bosques son, al mismo tiempo, comunidades campesinas**. Al producir alimentos, estas comunidades viven, se reproducen y mantienen su cultura y soberanía alimentaria gracias a sus tierras, bosques y entornos.

Otro aspecto que las relaciona, sin embargo, son las amenazas que confrontan constantemente por políticas neoliberales que buscan **concentrar la tierra y bosques para el beneficio de unos pocos** - ya sean empresas transnacionales, agencias gubernamentales, magnates u organizaciones de la conservación, con los llamados proyectos de carbono forestal (REDD+) o de 'compensación' en general. El

acaparamiento de tierras sigue expandiéndose, principalmente en el Sur global y, con este, la fuerte opresión, criminalización y violencia.

En este boletín contamos con un artículo escrito por la Asociación Nacional de Campesinos y Lugareños de **Camerún** (Synaparcam, por su sigla en francés) que expone cómo la empresa de plantaciones de palma aceitera Socapalm intenta extender una certificación con el único objetivo de generar más beneficios económicos. Socapalm ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por sus desastrosas consecuencias para con los bosques, el entorno y las comunidades locales. Otro artículo resalta cómo una nueva tendencia, y al mismo tiempo estrategia, en la expansión de plantaciones de palma aceitera es el lanzamiento de programas que declaran que mejorarán la producción de cultivos alimenticios. Para esto, una delegación de la mayor confederación campesina de la **República Democrática del Congo**, la COPACO-PRP, y el WRM conocieron la experiencia de familias campesinas con el programa llamado PAKIN en la provincia de Kwilu, un lugar con una historia de despojo, lucha, deforestación, acaparamiento de tierras y resistencia desde la época colonial.

Otro artículo evidencia una táctica que viene siendo usada por empresas madereras y de plantaciones en **los bosques de la Cuenca del Congo**. Las empresas madereras más prominentes de la República del Congo, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana tienen conexiones con los proyectos de plantaciones que están tumbando los bosques. Asimismo, empresas de plantaciones con problemas para financiar sus operaciones están utilizando la extracción de madera como una forma de ganar dinero.

El caso de la ciudad de Três Lagoas, en el estado de **Mato Grosso do Sul, Brasil**, demuestra la fuerte influencia que las empresas de plantaciones de árboles y celulosa pueden ejercer sobre la población, con el objetivo clave de neutralizar la resistencia. Aprovechándose de la ausencia del Estado, las empresas han logrado avanzar en estos territorios con 'proyectos sociales' que vuelven a las familias dependientes de su presencia. Por otro lado, desde **Uruguay**, un artículo nos alerta sobre la latente amenaza de la instalación de la tercera mega-fábrica de celulosa en ese país, esta vez en manos de la finlandesa UPM.

Desde **Acre, Brasil**, la historia de una comunidad que se encuentra dentro de un proyecto de carbono forestal o REDD+ de 40 mil hectáreas evidencia la difícil lucha por el acceso a y tenencia de tierras, en especial cuando la comunidad de siringueros que ha vivido allí por generaciones no cuenta con los documentos legales necesarios. El proyecto, por su parte, ya vendió muchos créditos de carbono y, hasta el momento, solo entregó un kit dental y una visita al dentista a la comunidad.

Pero son las comunidades campesinas y dependientes de los bosques que arraigadas a sus tierras, bosques y espacios de vida vienen luchando por resistir el empuje de concentrar cada vez más tierras para la acumulación de beneficios económicos. Sus luchas de resistencia vienen de la mano con la defensa de sus tierras y bosques, pero además, de sus muchas otras formas de vivir, concebir y relacionarse con el mundo. Estas otras formas concentran historias y saberes que se originan en incontables generaciones atrás.

Esta lucha de resistencia y defensa de la vida se evidencia en un artículo de este boletín sobre el avance nocivo de la industria agrícola y del mega-turismo en **Bali, Indonesia**,

donde la organización de base de las comunidades, íntimamente ligadas a concepciones del mundo que priorizan una relación directa y sagrada con el entorno, logra que las empresas no las despojen de sus tierras, bosques y fuentes de agua.

¡Que disfruten la lectura!

República Democrática del Congo: Convirtiendo una vez más las tierras campesinas en monocultivos de palma aceitera



Instalaciones de Unilever abandonadas en Lusanga, RDC. Ph: WRM.

El proyecto PPAKIN promete mejorar las condiciones de vida de familias campesinas en la República Democrática del Congo (RDC). Pero en la provincia de Kwilu, las campesinas y campesinos están enojados: el proyecto les hizo pagar por plantines de palma aceitera industrial sin recibir más apoyo después.

A lo largo de los últimos diez o quince años **se ha dado una renovada ola de expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera en los países de África central y occidental**. Esto se debe, principalmente, al interés de las empresas transnacionales de obtener ganancias de la creciente demanda de aceite de palma en el mercado global. Las plantaciones a gran escala invaden tierras comunitarias, lo que afecta la soberanía alimentaria y los espacios culturales o sagrados y aumenta la violencia, en particular hacia las mujeres (1). Esto ha llevado a muchas protestas por parte de las comunidades.

Una nueva tendencia de esta expansión es el lanzamiento de programas que declaran que sobre todo mejorarán la producción de cultivos alimentarios. A pesar de que la promoción de plantaciones de palma aceitera es parte de estos programas, sus promotores, entre los que se cuentan los sectores público y privado (inter) nacionales, aseguran que éstas no son su principal objetivo. Además, declaran que no son las empresas quienes plantarán las palmas aceiteras, sino los campesinos.

Un ejemplo de lo anterior es el programa GRAINE en Gabón. Promovido por la empresa multinacional de agronegocios Olam y el gobierno de Gabón, dicho programa declara que aumentará la producción interna de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos y del país. Pero en la práctica, el proyecto promueve principalmente las plantaciones industriales de palma aceitera en tierras campesinas mediante las llamadas 'cooperativas' campesinas. (2)

Preocupados con esta nueva tendencia, una delegación de la mayor confederación campesina de la República Democrática del Congo, la COPACO-PRP (*Confédération paysanne du Congo-Principal Regroupement Paysan*), y el WRM decidieron visitar en febrero de 2018 un programa similar en la provincia de Kwilu, unos 500 kilómetros al este de la capital, Kinshasa. La COPACO y el WRM querían saber sobre la situación de los campesinos afectados por un **programa llamado PPAKIN**, que significa (en francés) "Programa de apoyo a los centros de aprovisionamiento de productos alimenticios y hortícolas de Kinshasa". El objetivo general del programa es "contribuir de forma sustentable a mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de los campesinos productores" (3). El proyecto, que comenzó en 2014, es llevado adelante por el gobierno de la RDC y financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU (FIDA) por un período de diez años, con una inversión total estimada de 115 millones de dólares estadounidenses (4).

Las familias campesinas que nos recibieron (5) nos contaron que en febrero de 2017 **habían recibido de PPAKIN los llamados plantines "mejorados" de palma aceitera de la variedad Tenera, junto con fertilizantes químicos**. Tenían que establecer un monocultivo con los plantines en unas cuatro o cinco hectáreas que hasta ese momento estaban destinadas al cultivo de alimentos - una superficie considerable para la agricultura campesina en la RDC. Los técnicos del proyecto les dijeron que había que aplicar una dosis específica de fertilizante con cada árbol plantado. Para poder participar del programa, **los campesinos tuvieron que pagar una cuota de inscripción** de 15 mil francos congoleños, equivalentes a unos 9 dólares estadounidenses, una cantidad considerable para la RDC. Algunos mencionaron también que habían firmado un acuerdo (un "*protocole d'accord*"), pero no pudimos tener acceso a éste.

Los campesinos enfatizaron que se les había prometido apoyo financiero para mantener las plantaciones de palma aceitera durante los cinco o seis años previos a que las palmas comenzaran a producir. Pero **hasta ahora no han recibido absolutamente ningún apoyo**. Están muy enojados por eso y sienten que el proyecto los ha traicionado. Además, **mantener entre cuatro y cinco hectáreas de palma aceitera, con 280 plantas por hectárea, requiere de mucho trabajo**.

Un campesino enfrentó esta situación plantando mandioca en medio del monocultivo de palma aceitera, en un intento de obtener algún ingreso y alimentos de la parcela que antes estaba cubierta de cultivos alimenticios. Otra familia campesina, sin embargo, preocupada por los fertilizantes químicos que se vieron obligados a aplicar, decidió no plantar ningún otro cultivo entre las palmas aceiteras. Según la experiencia de los miembros de la COPACO, los insumos químicos afectan negativamente el suelo y sus cultivos alimentarios. Por lo tanto producen sus principales cultivos alimentarios, como mandioca y maíz tradicional, así como otras verduras, sin ningún insumo químico. Un campesino declaró que "los fertilizantes químicos no dejan que los otros cultivos crezcan como es debido".

Una región marcada históricamente por la palma aceitera

Desde tiempos inmemoriales, la provincia de Kwilu está cubierta de plantaciones de palmas aceiteras "silvestres", extremadamente importantes y con múltiples usos para las comunidades locales. Kwilu ha sido históricamente el mayor productor de aceite de palma del país (6).

Alrededor de 1910, la fábrica británica de jabón de los hermanos Lever (*Lever Brothers*), buscando aceite vegetal barato, descubrió este tesoro natural. Obtuvo una concesión del gobierno colonial y estableció una empresa llamada *Huileries du Congo Belge* (HCB), que luego de la independencia pasó a llamarse *Plantations Lever au Congo* (PLC) y, durante el período del ex presidente Mobuto, *Plantations Lever du Zaire* (PLZ). Un campesino de mayor edad nos relató cómo **HCB, luego de haber obtenido su concesión, empezó a "comprar" el acceso a las plantaciones de palma aceitera natural en el distrito de Lusanga, pagando a los líderes de tierra locales una bolsa de sal para asegurarse el acceso a 100 hectáreas**. La empresa empezó a producir plantines a partir de las palmeras naturales y los plantó en líneas con el fin de aumentar la producción, creando plantaciones semi-intensivas. Muchos otros empresarios belgas y portugueses siguieron el ejemplo de Lever Brothers y se asentaron para lucrar con esta palma aceitera natural.

Se reclutaron a la fuerza trabajadores de otras regiones que fueron explotados para llevar a cabo la riesgosa tarea de cosechar los frutos de la palma. Fueron instalados en un campamento de trabajadores en Lusanga, que en aquel tiempo se llamaba Leverville, donde la empresa estableció su planta extractora de aceite de palma. Tras la crisis económica de 1929, con la reducción de los salarios de los trabajadores, el mayor levantamiento contra el régimen colonial belga de 1931 tuvo lugar en la aldea de Kikwit (7), que resultó en una violenta represión cuyo saldo fue centenares de muertos. Un campesino mayor nos contó que su familia sólo había logrado sobrevivir por haberse escondido en el bosque.

Cuando Mobutu llegó al poder en 1965 comenzaron las décadas de crisis económica y guerras civiles. La empresa abandonó Lusanga, incluyendo a sus instalaciones extractoras de aceite y las plantaciones. Sin embargo, la empresa mantuvo plantaciones en otras regiones y vendió parte de éstas en 2009 a la empresa canadiense FERONIA, donde las comunidades han estado luchando durante años para recuperar sus tierras robadas desde el período colonial (8).

¿Recordar el pasado para construir el futuro?

¿Qué ocurrió con Lever Brothers? En 1930, con su muy lucrativo negocio en el Congo colonial, se fusionó con la empresa holandesa Dutch Margarine Unie, y se formó UNILEVER. Esta compañía británico-holandesa, productora de bienes de consumo, creció hasta convertirse en una de las multinacionales más grandes a nivel global, cuyas ganancias anuales ascienden a miles de millones de dólares. La descripción histórica sobre la 'exitosa' actuación de la empresa que figura en su sitio en internet parece haber **excluido cuidadosamente la historia de violencia y abusos hacia el pueblo congoleño**.

Hoy día, a pesar de su discurso público, parece que **el proyecto PPAKIN pretende revivir el pasado en la misma provincia de Kwilu, convirtiendo una vez más las**

tierras campesinas en monocultivos de palma aceitera. Su apoyo financiero tiende a empujar en la misma dirección: ONU-FIDA ha estado promoviendo la nueva ola de expansión de la palma aceitera industrial en África, en estrecha colaboración con los gobiernos africanos, el Banco Mundial y el sector privado.

¿Y qué ha ocurrido con Lusanga y las campesinas y campesinos desde que UNILEVER se fue durante el período de Mobutu? Las instalaciones de la empresa se han convertido en ruinas. El pueblo, que hoy tiene unos 15 mil habitantes, no cuenta con servicios básicos como agua y suministro de energía eléctrica. Los campesinos se hicieron cargo de las antiguas plantaciones de UNILEVER. Son principalmente hombres especializados en la producción a pequeña escala y con equipos artesanales quienes están cosechando aceite de palma para el mercado interno. Están buscando formas de organizar y mejorar su producción, puesto que el aceite de palma es clave en su cultura y puede facilitarles algún ingreso.

Campe sinos que se organizan para construir un futuro diferente

Las organizaciones campesinas como la COPACO alertan sobre la amenaza de expandir los monocultivos de palma aceitera y otros cultivos debido a sus impactos sociales, culturales y ambientales. Hacen énfasis en que **las campesinas y campesinos deben mantener el control sobre las tierras de las que dependen**. Sin embargo, la sugerida "integración" del campesinado con el sector de los agronegocios, como el programa PPAKIN, pone en riesgo este control sobre sus tierras. La COPACO defiende un sistema de producción diversificada basado en el control sobre las tierras para garantizar la soberanía alimentaria para las generaciones presentes y futuras. Los principios de la agroecología, radicalmente opuestos a la implementación de monocultivos dependientes de insumos químicos, son fundamentales.

Hoy en Kikwit todavía puede encontrarse a la venta en el mercado el buen aceite de palma rojo, producido por mujeres y el que ellas prefieren para cocinar los alimentos. En su experiencia, es imposible producir este aceite de buena calidad a partir de los plantines mejorados que distribuye el proyecto PPAKIN. **El empuje del proyecto PPAKIN no tiene otro fin que atraer empresas privadas para invertir en y controlar la producción de la palma aceitera.** Esto puede volverse una seria amenaza para el aceite de palma tradicional, que aún se encuentra bajo el control campesino y tiene múltiples usos muy relacionados con su vida cotidiana y sus necesidades.

Un comentario interesante de los campesinos con los que conversamos es que la palma aceitera natural se propaga fácilmente por sí misma.

Comentarios finales

Si el proyecto PPAKIN consigue atraer inversiones del sector privado para 'rehabilitar' las instalaciones de extracción de aceite de palma en Lusanga, 'rehabilitará' también la misma lógica anterior: **usurpar tierras y explotar a los trabajadores y a la gente en aras del lucro privado, con el poder concentrado en las manos de empresas privadas apoyadas por el Estado**. Una vez más, las comunidades campesinas cumplen la función esencial de producir la materia prima para el negocio del aceite de palma al menor costo posible. Pero con esta lógica, aquellos campesinos que producen la palma aceitera pero no pueden cumplir el contrato que tienen con la empresa privada, corren el riesgo de perder sus tierras.

Winnie Overbeek, winnie [at] wrm.org.uy
Integrante del Secretariado internacional del WRM

- (1) Boletín del WRM N° 236, marzo de 2018, Mujeres, plantaciones y violencia: construyendo resistencias, <https://wrm.org.uy/es/boletines/mujeres-plantaciones-y-violencia-construyendo-resistencias-boletin-n-236-marzo-2018/>
- (2) La semilla de la desesperación: las comunidades pierden tierras y fuentes de agua debido a la agroindustria de OLAM en Gabón. Boletín del WRM N°231, junio de 2017, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/la-semilla-de-la-desesperacion-las-comunidades-pierden-tierras-y-fuentes-de-agua-debido-a-la-agroindustria-de-olam-en-gabon/>
- (3) FIDA, *Programme PAPAKIN, document de conception de programme*, 2013.
- (4) PAPAKIN: *Une solution pour contribuer a la sécurité alimentaire*, Forum Des As, <http://www.forumdesas.org/spip.php?article581>
- (5) Cuando llegamos a Kikwit nos encontramos con que nuestra visita había sido anunciada por una emisora radial local el día anterior. Al mismo tiempo, la cooperativa establecida como parte de las actividades del proyecto PAPAKIN en Kikwit se negó a recibirnos. Averiguamos que ese mismo día los campesinos que forman parte del proyecto habían recibido instrucciones de no hablar con nosotros. Sin embargo, pudimos visitar a varios campesinos que participan en el proyecto y compartieron con nosotros sus experiencias.
- (6) *Oil palm in Africa: Past, present and future scenarios – 2013 update*, WRM, (solo disponible en inglés y francés) http://wrm.org.uy/books-and-briefings/oil_palm_in_africa/
- (7) *RDC: a Lusanga, les fantômes d'Unilever au Congo*, 2017, JeuneAfrica, <http://www.jeuneafrique.com/depeches/433972/economie/rdc-a-lusanga-fantomes-dunilever-congo-zaire/>
- (8) Conflictos por la tierra y finanzas sombrías rodean a empresa palmícola de República Democrática del Congo respaldada por fondos de desarrollo, 2016, <https://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/conflictos-por-la-tierra-y-finanzas-sombrias-rodean-a-empresa-palmiticola-de-republica-democratica-del-congo-respaldada-por-fondos-de-desarrollo/>

Camerún: Contestación de los lugareños sobre la Certificación ISO 14001:2004 de Socapalm



Camerún. Ph: Synaparcam.

La empresa Socapalm fue creada en 1968 por el gobierno camerunés y luego privatizada en 2000. **Socapalm está bajo el control de SOCFIN, un grupo agroindustrial multinacional especializado en el cultivo de palma aceitera y caucho.** A su vez, SOCFIN es controlado por el empresario belga Hubert Fabri y el francés Vincent Bolloré. El grupo dispone de sociedades financieras y operacionales en Bélgica, Luxemburgo y Suiza, que gestionan sus plantaciones en una decena de países africanos y asiáticos. **La política de expansión agresiva del grupo ha llevado al acaparamientos de tierras,** cuyos impactos sobre las condiciones de vida de las poblaciones locales han provocado numerosas reacciones de los aldeanos directamente afectados. **Con la llegada de las plantaciones a Camerún en 1968 se destruyeron cuantiosas hectáreas de bosque que se reemplazaron progresivamente con monocultivos de palma aceitera. Así también se redujeron las superficies silvícolas** utilizadas hasta el momento por las poblaciones locales para sus actividades de recolección y caza (1).

Las comunidades aledañas a las plantaciones agroindustriales de Socapalm (filial de SOCFIN Bolloré en Camerún) están preocupadas por la forma en que las actividades de esta empresa **están contaminando su ambiente.** Y no han parado de denunciar cotidianamente el sistema de gestión ambiental de la empresa que los expone a **enfermedades graves y molestias diversas.**

En África Central, muchas empresas cuentan con la certificación ISO 14001, que trata sobre la protección del medio ambiente donde la empresa lleva a cabo sus actividades. **La certificación ISO 14001 de Socapalm caducó en mayo de 2017. Antes de esa fecha, Socapalm contrató a un gabinete para realizar un estudio de impacto ambiental para la renovación de dicha certificación.** La forma en que Socapalm contamina nuestro ambiente, sumada al trabajo legal realizado por el gabinete en cuestión, **nos han llevado a denunciar la renovación de la certificación.**

Los habitantes aledaños a seis plantaciones de Socapalm han registrado algunos **casos flagrantes de no conformidad con las exigencias de la norma ISO 14001:2004**, con los principios generales en materia de protección del medio ambiente, con las exigencias legales y reglamentarias de la República de Camerún y, asimismo, con las convenciones que vinculan al Estado con la Socapalm.

Las fuentes de agua que utilizan los lugareños para la limpieza y el consumo están **contaminadas por los fertilizantes y otros productos químicos** que son arrastrados en las escorrentías, después de las lluvias. Los residuos apilados en las lagunas también van a parar a esos cursos de agua que, **sin el tratamiento apropiado, alimentan a las aldeas vecinas**. Los escobajos procedentes de la planta extractora de aceite se vuelcan en la plantación, lo que provoca **la proliferación de moscas, además de los olores nauseabundos provenientes de las lagunas. A esto se suma la liberación al aire de cenizas del humo de las fábricas de Socapalm**.

La validez de la certificación estaba condicionada al *funcionamiento continuo y satisfactorio del sistema de gestión* de Socapalm. El artículo 29 de la Ley marco relativa a la gestión del medio ambiente, así como el artículo 5 de la Ley N°98/005 de 14 de abril de 1998 que trata sobre el régimen del agua, prohíben este tipo de prácticas. **La contaminación de las poblaciones río abajo conlleva la multiplicación exponencial de las víctimas de enfermedades hídricas**. Las materias fecales de las fosas sépticas se vierten en lagunas no funcionales o cursos de agua. Cada año, **Socapalm vuelca el contenido de las fosas sépticas de los retretes de los campos donde residen sus trabajadores en las lagunas y algunos cursos de agua**, sin tener que crear sus propias estaciones de depuración donde tratar este tipo de desechos. Esto es una flagrante violación del Decreto N°2001/165/PM de 8 de mayo de 2001, que especifica las modalidades de protección de las aguas superficiales y subterráneas contra la contaminación.

Asimismo, se utilizan bolsas de fertilizantes para recoger frutos desprendidos o caídos. Durante la recolección de los racimos de nuez de palma, algunos frutos se desprenden y caen al suelo. Para no perderlos, **Socapalm solicita a niños menores y mujeres para que los recojan en las bolsas contaminadas por productos tóxicos peligrosos** (plaguicidas, fertilizantes, herbicidas...), exponiéndolos así a las enfermedades causadas por estos productos y contaminando una parte considerable de la cosecha. Esto contradice lo establecido en la Ley N° 2003/003 de 21 de abril de 2003 relativa a la protección fitosanitaria, que en sus artículos 19 y siguientes preconiza un tratamiento específico para este tipo de desecho peligroso.

Las preocupaciones planteadas por las víctimas no han sido tomadas en cuenta. Nosotros, las poblaciones aledañas a las plantaciones y principales víctimas de las disfunciones mencionadas más arriba, siempre hemos planteado a Socapalm estos problemas y muchos otros. La empresa jamás se ha dignado a aportar soluciones duraderas. Ni siquiera por respeto a sus obligaciones contenidas en el artículo 8, inciso 1 y siguientes de la Convención de cesión del 90 por ciento de las acciones que son propiedad del Estado en el capital de Socapalm, firmada el 30 de junio 2000.

Lo único que le importa a Socapalm es **generar más ganancias impunemente con ayuda de la certificación ISO**, algo que está lejos de merecer. Sin embargo, según la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza».

Synaparcam (Asociación Nacional de Campesinos y Lugareños de Camerún - Synergie Nationale des Paysans Et Riverains du Cameroun)

(1) SYNAPARCAM, Mobilisations des paysans a travers le Cameroun (Movilizaciones de los campesinos a través de Camerún), https://www.asso-sherpa.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_06_01_dossier-de-presse-synarcam.pdf

Cuenca del Congo: La tormenta que se viene



Ph: Earthsight

Este artículo se basa en una publicación reciente de Earthsight, “The Coming Storm” (La tormenta que se viene), de marzo de 2018. Dicha publicación, con todas las referencias, está disponible en inglés en: https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_3ad671d82fe74cf98a8a3a662d463521.pdf Y en francés en: https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_c72f6f1f3119453b8c17a32e7ca83f46.pdf

La cuenca del Congo alberga una de las tres últimas grandes extensiones de bosque tropical del mundo, que brinda sustento a más de 75 millones de personas. Aunque se ha degradado mucho a causa de la tala, la mayor parte de los bosques de África Central permanece en pie. Pero se avecina una tormenta.

A lo largo de 2017, la ONG Earthsight hizo un seguimiento del desarrollo de las **plantaciones de caucho y palma aceitera** en la cuenca del Congo, prestando particular atención a la República del Congo y la República Democrática del Congo. Los datos demuestran que aunque las condiciones económicas globales desfavorables han llevado a que muchos proyectos se demoren o cancelen, las plantaciones industriales siguen siendo una gran amenaza para los bosques y los pueblos de la región. **Poco puede hacerse para impedir la aceleración de la destrucción del bosque una vez que aumenten los precios de los bienes de consumo.**

Para finales de la década de 2000, los precios del aceite de palma y el caucho aumentaron notablemente, lo cual llevó a una estampida de inversiones en la cuenca del Congo; casi todas las semanas se anunciaban vastas nuevas plantaciones. Para 2013 se habían firmado contratos que cubrían medio millón de hectáreas solamente para palma aceitera, y se estaban negociando proyectos para otro millón más de hectáreas. Se anunciaba que los proyectos más avanzados de Camerún, de República del Congo y de Gabón aumentarían las tasas de deforestación de dichos países en un 14, 48 y 140 por ciento respectivamente. Por fortuna para los bosques de la región, los precios del aceite de palma y el caucho se desplomaron a fines de 2011 y permanecen bien por debajo de su pico. Muchos proyectos han avanzado poco debido a la falta de financiación. Otros se cancelaron silenciosamente. **Las plantaciones que más progresaron han sido aquellas que cuentan con los mayores respaldos económicos, incluyendo de gobiernos extranjeros.**

El desarrollo más rápido ocurrió en Gabón, con las extensas plantaciones de palma aceitera y caucho del gigante singapurense de los productos agrícolas, **Olam** (1). Imágenes satelitales han revelado que la empresa **taló unas 35.000 hectáreas de bosque** durante los últimos seis años. En febrero de 2017, tras una exposición con alta repercusión mediática sobre su continua destrucción, Olam acordó suspender nuevas talas durante un año. Ahora, el compromiso se ha extendido hasta enero de 2019.

El segundo mayor destructor también está apoyado por un gobierno. **Sudcam, subsidiaria del gigante conglomerado estatal chino de aceite y productos químicos Sinochem, ha talado casi 10.000 hectáreas en Camerún.** Este proyecto es directamente adyacente a la Reserva de Fauna de Dja, que es Patrimonio de la Humanidad. Un informe de UNESCO de 2012 mencionó la amenaza que las plantaciones de caucho suponen para la reserva. Los lugareños declaran que la plantación los ha despojado de sus tierras y que las autoridades del gobierno han reaccionado a sus protestas con amenazas e intimidación. Las imágenes satelitales más recientes muestran que la tasa de tala en esta zona se aceleró durante 2017.

Las empresas madereras se zambullen en la industria de las plantaciones, y viceversa

Las empresas madereras más grandes y notorias en la República del Congo, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana están conectadas de algún modo con proyectos de plantaciones que talan bosques. **Con un largo historial de infringir la ley y salirse con la suya, las empresas madereras están llevando ahora esa experiencia al sector de las plantaciones de árboles.**

Por su parte, las empresas de plantaciones que se encuentran en aprietos para financiar sus operaciones están, en muchos casos, volcándose a la madera como fuente de dinero. Esto es especialmente cierto en la República del Congo, que alberga por lejos la mayor superficie de bosque en riesgo inminente de desarrollo de plantaciones industriales.

República del Congo: concesiones de plantaciones para maderero

Sobre el papel, el gobierno de la República del Congo está haciendo mucho para proteger los bosques. Ha ratificado más de una docena de tratados y convenciones ambientales internacionales. En 2010 firmó un acuerdo con la Unión Europea que aspira a garantizar que toda la madera importada a Europa desde el Congo provenga de fuentes legales

(AVA-FLEGT). También firmó en 2016 el Acuerdo de Marrakech, una promesa de promover el sector de la palma aceitera "garantizando la supervivencia a largo plazo de (...) los bosques tropicales". En la realidad, sin embargo, el gobierno está, a través de sus acciones y deliberadas inacciones, socavando y contradiciendo directamente estos tratados y acuerdos.

Entre 2008 y 2012 se otorgaron **más de medio millón de hectáreas de nuevas concesiones de palma aceitera y caucho. Casi toda la tierra en cuestión era bosque.** El gobierno jamás publicó los contratos, mapas o permisos en ninguno de los casos. En todos ellos se está talando el bosque ilegalmente, según concluyó el Observador Independiente en Apoyo de la Aplicación de la Ley Forestal. Ninguna de las empresas involucradas ha llevado a cabo la evaluación de impacto social y ambiental que exige la ley, ni obtenido el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los dueños consuetudinarios de las tierras.

El proyecto gestionado por **Atama Plantation SRL** es la mayor concesión para plantaciones otorgada en la región. En 2010 la empresa **pasó a controlar 470.000 hectáreas de bosques.** Los propietarios de la firma se escondieron cuidadosamente detrás de múltiples capas de empresas fantasmas en paraísos fiscales. Más tarde se descubrió que entre los principales actores estaban el magnate inmobiliario malayo Robert Tan y el jefe de una de las empresas madereras malayas más grandes y notorias del Congo, Reuban Ratnasingam.

Ya para fines de 2011 las autoridades habían descubierto pruebas de múltiples ilegalidades graves. Se habían cortado cientos de árboles sin hacer un reporte oficial, se habían alterado registros en forma ilegal, y la empresa había talado más de dos kilómetros de bosque fuera de los límites del permiso que tenía. La empresa también estaba operando sin la evaluación del impacto ambiental, que es un requisito legal.

El desmonte de tierras para la concesión de palma aceitera progresó con extrema lentitud en 2014 y 2015, antes de detenerse por completo a fines de ese último año. **Atama entonces comenzó una nueva estrategia para hacer dinero: se convirtió en una empresa maderera.** Aunque Atama había estado cortando, vendiendo y procesando madera desde el comienzo de su operaciones, la empresa podía afirmar que se trataba de un efecto secundario del desmonte de bosque para establecer la palma aceitera. Ahora se ha abandonado toda apariencia de hacer otra cosa. A partir de mayo de 2016, las imágenes satelitales muestran la rápida propagación de la tala selectiva de árboles, intensiva y destructiva, a lo largo de una amplia zona dentro de la concesión de la empresa, donde antes había un denso bosque.

En febrero de 2017 el gobierno finalmente exigió que se detuviera el madereo ilegal. Para ese momento 5.000 hectáreas ya habían sufrido un fuerte impacto. Poco después, una investigación realizada por una ONG local encontró que la empresa seguía procesando grandes volúmenes de maderas de gran valor (2). Según esta investigación, **Atama también había sofocado protestas mediante la intimidación.** En setiembre de 2017, el Departamento Forestal anunció que había descubierto que unos 14.000 metros cúbicos de troncos cortados dentro de la concesión de Atama habían sido sacados del país por contrabando. En el puerto de Pointe Noire se confiscaron grandes volúmenes de otros troncos pertenecientes a Atama, y se suspendió la licencia de exportación de la empresa. Pero su licencia de palma aceitera permaneció intacta.

En diciembre de 2017, la empresa malaya perteneciente a Robert Tan que cotiza en la bolsa de valores, Wah Seong, que había comprado formalmente a Atama en 2012, vendió silenciosamente sus acciones en 6 millones de dólares estadounidenses: 19 millones menos de lo que había pagado. Este anuncio se apresuró justo antes de Navidad y solo se mencionó a una empresa fantasma intermediaria, descrita como una empresa de inversiones. No se mencionó que su principal activo es un contrato para desarrollar una extensa plantación de palma aceitera en la República del Congo. Esta misteriosa empresa, cuya dirección declarada es una sociedad interpuesta que opera desde una pequeña oficina en las afueras de Kuala Lumpur (y que funciona como fachada de más de 250 empresas), es ahora la principal accionista del proyecto Atama.

A mediados de 2016, más o menos al mismo tiempo que aumentaban las actividades de maderero en la concesión de Atama, comenzaban también **el maderero y el desmonte en una concesión de caucho y palma aceitera otorgada a una empresa relacionada, Lexus Agric, en el sur del Congo**. Según se informa, Lexus es una subsidiaria o filial de Atama, de propiedad malaya a la que se otorgó una licencia por una concesión de 50.000 hectáreas en 2013, en la mitad de las cuales se plantaría palma aceitera, y caucho en la otra.

No se han publicado contratos ni permisos de la concesión, pero un mapa obtenido de las autoridades revela que la mayor parte del área de la licencia también eran bosques. Las últimas averiguaciones del Monitor Independiente oficial muestran que Lexus Agric también está operando ilegalmente, en tanto las imágenes satelitales revelan más maderero que se extiende mucho más allá de los límites legales de su permiso de deforestación. Para enero de 2018 la empresa había talado más de 20 kilómetros de carreteras para el maderero en el bosque circundante.

El director general de Lexus es Jérémie Issamou, que hasta 2015 también fue el vicedirector general de Atama. En junio de 2016 ambas empresas, Atama y Lexus, estaban ocupadas cortando madera ilegalmente cuando Issamou publicó en su página de Facebook una foto de un tronco gigante en un camión. Hay un comentario (en francés): "Ten cuidado. No presumas demasiado sobre tu actividad secundaria. Si no, habrán sanciones...". El que escribió ese comentario es Simon Dieudonné Savou, director general de Agricultura en la República del Congo.

RD del Congo: talando bosques sin permiso

La tala ilegal de bosques está ocurriendo en la República Democrática del Congo bajo la apariencia de proyectos para desarrollar plantaciones abandonadas. La falta de transparencia es especialmente preocupante, en vista de lo que se encontró detrás de un velo de secretismo.

Desde 2002 se exigen autorizaciones para talar cualquier superficie boscosa mayor de dos hectáreas. Sin embargo, hasta la fecha, el Departamento Forestal no ha emitido ni un solo permiso a una empresa agrícola. Un ex alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente afirmó que se estaba permitiendo a las empresas talar el bosque sin permisos ni evaluaciones de impacto, y sin pagar impuestos.

Una empresa parece confirmar la situación: **The Groupe Blattner Elwyn (GBE), un poderoso conglomerado controlado por un expatriado estadounidense**. Elwyn Blattner construyó mucho de su negocio familiar congoleño durante el reinado del

cleptócrata Mobutu Sese Seko. Las posesiones de GBE incluyen un banco, una línea aérea y **la mayor empresa maderera de la RD del Congo: SIFORCO, que produce la cuarta parte de toda la madera extraída en el país**. El Observador Independiente en Apoyo de la Aplicación de la Ley Forestal, que tiene mandato oficial, descubrió que en 2013 una de las concesiones de SIFORCO había cortado 50 por ciento más árboles de lo que se le había autorizado, lo que equivalía a millones de dólares.

GBE es también una de las mayores firmas de agronegocios de la RD del Congo. **Controla más de 42.000 hectáreas para la producción de palma aceitera, caucho y cacao**. Entre sus posesiones están la *Compagnie de Commerce et Plantation* (CCP) y las plantaciones de Lisafa y Ndeke, que cubren alrededor de 6.900 hectáreas. Earthsight, en colaboración con la ONG local Group for Action to Save Man and the Environment (GASHE), reveló pruebas de que **la CCP ha convertido ilegalmente unas estimadas 1.860 hectáreas de bosque en plantaciones de palma aceitera**. La empresa también está operando sin los requeridos plan de manejo ni evaluación del impacto social y ambiental.

Las ONGs descubrieron también **el conflicto de la empresa con las comunidades locales** en las seis zonas de plantaciones. Los hallazgos también ponen en tela de juicio los derechos de la empresa sobre gran parte de la tierra que ocupa.

Las historias de **promesas incumplidas y la destrucción de medios de sustento** se repiten en una comunidad tras otra. El jefe de la aldea de Nkoy-Moke, por ejemplo, declaró que la CCP había convertido en plantaciones 1.200 hectáreas de bosque que son parte de su tierra consuetudinaria entre 2009 y 2011. Un habitante de otra aldea, Nkoy-monene, se quejó de que "la escasez de productos no madereros del bosque está causando desnutrición en nuestras aldeas". En su sitio web, GBE declara que apoya a las comunidades locales construyendo y equipando escuelas, pero muchas de las escuelas prometidas nunca fueron terminadas ni equipadas. Esto no debería sorprender mucho, puesto que **GBE tiene una larga historia de no cumplir con sus obligaciones para con las comunidades en sus concesiones madereras**.

Los poderosos ministerios de agricultura y otras autoridades pertinentes en estos países siguen siendo una caja negra, y los donantes internacionales que con ellos trabajan no han hecho muchos esfuerzos observables para abrirla. Por el contrario, **el dinero de donaciones sigue flyendo**.

Earthsight, info [at] earthsight.org.uk
www.earthsight.org.uk

(1) Para más información sobre Olam en Gabón, véase "La semilla de la desesperación: las comunidades pierden tierras y fuentes de agua debido a la agroindustria de OLAM en Gabón", boletín del WRM N°231, junio de 2017, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/la-semilla-de-la-desesperacion-las-comunidades-pierden-tierras-y-fuentes-de-agua-debido-a-la-agroindustria-de-olam-en-gabon/> o "La estafa de las plantaciones de palma "verdes": el caso de OLAM", boletín del WRM N° 230, abril-mayo de 2017, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/la-estafa-de-las-plantaciones-de-palma-verdes-el-caso-de-olam/>

(2) Para más información sobre Atama, véase "República del Congo: "Las plantaciones de Atama son actualmente una fuente de descontento para las comunidades locales y la nación entera", boletín del WRM N° 233, setiembre de 2017, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/republica-del-congo-las-plantaciones-de-atama-son-actualmente-una-fuente-de-descontento-para-las-comunidades-locales-y-la-nacion-entera/>

Uruguay: La amenaza de una tercer mega-fábrica de celulosa



Uruguay. Ph: WRM

Uruguay, con apenas 17 millones de hectáreas de superficie y una población de poco más de tres millones de habitantes, soporta en su territorio dos mega fábricas dedicadas a la producción de celulosa. Por un lado la empresa finlandesa UPM (ex-Botnia), con una producción anual de 1 millón 300 mil toneladas, ubicada sobre el Río Uruguay. Por otro, Montes del Plata, un consorcio entre la sueco-finlandesa Stora-Enso y la chilena Arauco, que produce 1 millón 400 mil toneladas anuales, ubicada sobre el Río de la Plata.

Actualmente se viene avanzando en la posible instalación de una tercera fábrica. En 2017, UPM firmó un contrato con el gobierno uruguayo para instalar su segunda planta en el país. La concreción del proyecto está sujeta a exorbitantes condiciones impuestas por la multinacional y aceptadas por el gobierno.

Esto no es nuevo. Para que la instalación de las dos primeras fábricas fuera viable, el gobierno uruguayo otorgó todos los beneficios que estas empresas exigieron (instalación en zona franca, exoneración de impuestos nacionales, entre otros), elaborando acuerdos de protección de inversiones a medida y firmando acuerdos “secretos” gobierno - empresas. Todo esto bajo total hermetismo, dando a conocer las implicancias de esos acuerdos para el país tan solo después de haberlos firmado.

La empresa impone, el gobierno dispone

En 2016 comenzaron a correr rumores sobre la llegada de una tercera mega fábrica de celulosa. Esta se instalaría en el centro del país, sobre otra de las principales fuentes de agua dulce del país, el río Negro, con una inversión de 4 mil millones de dólares. La futura fábrica estaría ubicada a unos 300 kilómetros de la capital del país, Montevideo. Y la historia se volvió a repetir. El gobierno actuó con total secretismo, dejando completamente por fuera a la sociedad civil e iniciando negociaciones con la finlandesa UPM para la instalación de su segunda mega fábrica (UPM2) en Uruguay. (1)

A finales de 2017 el gobierno firmó un contrato con la empresa por el cual UPM se aseguró las condiciones necesarias para realizar su inversión. Esta fábrica, tendría una capacidad anual de producción de hasta 2,4 millones de toneladas anuales de celulosa. A través de dicho contrato, el gobierno se comprometió a realizar obras de infraestructura vial y ferroviaria para conectar la fábrica de celulosa a la capital del país, así como para realizar obras en el puerto de Montevideo para uso exclusivo de la empresa. Con un monto superior a los mil millones de dólares, estas obras se han fijado como condición para que la empresa resuelva si se instala o no en el país. Solo después de que el gobierno avance considerablemente con las obras pautadas, la empresa confirmará si instala o no en el país la fábrica UPM2. (2)

Negociaciones secretas y falsas promesas

Nuevamente con la creencia de que la tercera planta de celulosa será la “salvación” para el país, el gobierno uruguayo cede a las presiones que UPM le impone. Cuando el contrato secreto se hizo público, salió a la luz cuán disparatada fue la negociación.

La empresa y el gobierno lanzaron falsas promesas para intentar “apaciguar” el escándalo de las exigencias de UPM. Y una vez más la historia se repite. Dichas promesas son las mismas que se hicieron con la llegada de las anteriores dos fábricas: miles y miles de empleos, aumento del PBI, desarrollo, desarrollo y más desarrollo.

En marzo de 2018 se dio a conocer el documento para la “Viabilidad Ambiental de Localización”, uno de los pasos previos a la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental. A través de dicho documento la ciudadanía pudo acceder a algún dato más sobre el emprendimiento. (3)

Inversión: de acuerdo a un artículo reciente del MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable), la inversión que la empresa promete hacer, si el gobierno de Uruguay cumple con su parte del acuerdo, en lugar de ser de 4 mil millones de dólares como lo anunciaron inicialmente, sería en el entorno de los 2.500 millones de dólares. Sin embargo, la inversión del gobierno uruguayo sería del entorno de los 1.850 millones de dólares, en vez de los mil millones mencionados inicialmente; (4)

Plantaciones: una de las principales denuncias de los grupos de la sociedad civil ante la instalación de fábricas de celulosa es la consecuente expansión de monocultivos de árboles. A pesar de los cientos de miles de hectáreas de monocultivos de eucaliptos que hay en el país, las fábricas siempre necesitarán de más plantaciones ubicadas a corta distancia de las mismas. A pesar de que el gobierno ha manifestado que no sería necesario incrementar el área de plantaciones, los documentos dados a conocer recientemente muestran que de concretarse este proyecto, se incrementarán en casi 90 mil las hectáreas con monocultivos de eucaliptos en la zona de impacto del proyecto;

Empleos: a corto plazo, las promesas de miles de empleos durante la etapa de construcción de UPM2 puede deslumbrar. Pero luego de los primeros 3 años, a partir de su puesta en funcionamiento, generará alrededor de 500 empleos en todo el complejo industrial, según datos de la empresa;

Ingresos para el país: al estar localizada en zona franca, la empresa no pagará ningún tipo de impuesto. El canon establecido por el uso de la zona franca es de 2,1 millones de

dólares anuales, pero al compararlo con los más de 1.800 millones de dólares puestos por el gobierno uruguayo en infraestructura y otros subsidios, la cifra es irrisoria.

Agua: según UPM, la empresa va a contribuir con mejorar la calidad de las aguas del Río Negro. La realidad es que la fábrica tomará 125 millones de litros diarios de agua del río, devolviendo 106 millones y medio de litros de “efluentes tratados”, según afirma la empresa. ¡La demanda de agua de la fábrica equivale al de una ciudad de 960 mil habitantes! Las aguas del Río Negro ya están saturadas de algunas sustancias como fósforo y nitrógeno. Por más que la empresa asegure que sus efluentes contendrán niveles de éstos y otros elementos por debajo de los estándares permitidos, igualmente estará contribuyendo y empeorando la ya existente eutrofización (aumento desmedido de algas tóxicas) del río. (4)

La experiencia no aprendida

Hoy, el país cuenta con más de un millón de hectáreas cubiertas por monocultivos de eucaliptos y pinos, pertenecientes en su mayoría a un puñado de empresas transnacionales. UPM y Stora-Enso/Arauco son propietarias de casi medio millón de hectáreas.

Las plantaciones industriales de árboles, junto con la sojización, contribuyeron a una transformación sin precedentes en el país: las praderas (principal ecosistema del Uruguay) fueron sustituidas por desiertos verdes de soja y árboles; la tenencia de la tierra varió significativamente, con una gran concentración de tierras en manos de empresas transnacionales; y se aceleró el despoblamiento del campo. De acuerdo al último censo, menos del 5 por ciento de la población del país permanece en áreas rurales. El precio de la tierra se multiplicó por 10 entre los años 2000-2014.

Las promesas de empleo y desarrollo, con el tiempo, no se cumplen. La población local recibe limosnas a través de los programas de “responsabilidad social empresarial”, comparado con la ganancia de estos grandes capitales. Río Negro, el departamento donde se ubica la primera fábrica de UPM que comenzó a operar en 2007, es donde se han mostrado las mayores tasas de desempleo del país.

A pesar de los evidentes y denunciados impactos, las empresas intentan maquillar de verde sus actividades mediante la “conservación” de algunas “islas” de territorio con flora y fauna nativa. Para lograr esto, las empresas invierten en técnicos y ONGs conservacionistas. No obstante, fuera de esas “islas de conservación”, la realidad es que se destruyen cientos de miles de hectáreas de campos al establecer monocultivos de árboles durante varios ciclos de corte continuos de 7 u 8 años cada uno. Sobran en el país evidencias de los impactos negativos que las plantaciones industriales han generado: disminución o pérdida total del agua de arroyos y pozos; afectación de fauna y flora nativa; rotura de la trama social y familiar en el medio rural, por nombrar solo algunos.

Sin embargo, el gobierno uruguayo sigue atando al país a nuevos megaproyectos celulósicos sin discutir el modelo industrial de monocultivos en gran escala que estos conllevan ni sus consecuencias para las poblaciones locales y el país en general.

Estos megaproyectos promueven las desigualdades, inequidades y la dependencia a un capital extranjero. Se consolida así, una vez más, una economía de enclave, un país del

Sur global, proveedor de materia prima a países centrales, cuya población asume los costos ambientales y parte de los económicos. ¿Es éste el país que queremos?

Lizzie Díaz, lizzie [at] wrm.org.uy y Teresa Pérez, teresap [at] wrm.org.uy
Miembros del secretariado internacional del WRM

- (1) “Que ganaría Uruguay con una tercera planta de celulosa?” <http://www.guayubira.org.uy/2017/05/que-ganaria-uruguay-con-una-tercera-planta-de-celulosa/>
- (2) Contrato Uruguay – UPM https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2017/noticias/NO_Y823/contrato_final.pdf
- (3) Viabilidad Ambiental de Localización de UPM2 https://www.dinama.gub.uy/oan/wp-content/uploads/2018/02/VAL_Planta-de-celulosa-Paso-de-los-Toros-.pdf
- (4) “La insustentable levedad de la planta UPM 2” <http://www.observatoriodelaguaenuruguay.com/la-insustentable-levedad-de-la-planta-upm-2/>

Indonesia: La resistencia de lo sagrado en Bali contra la “revolución verde” y la industria del turismo



Indonesia. Ph: WRM.

De las más de 17 mil islas que componen lo que llamamos hoy Indonesia, Bali es un “hotspot” del turismo mundial. Los millones de personas que la visitan anualmente llegan en búsqueda de sus playas, de los campos de arroz considerados patrimonio mundial de Unesco o de los famosos templos hindúes. No por casualidad Bali es conocida como la Isla de los Dioses: lo sagrado, vivido por las comunidades en sus relaciones cotidianas, hace parte de una gama de atracciones. Poco divulgados, sin embargo, son los impactos del turismo en la vida de las comunidades.

Subaks bajo amenaza

Los milenarios *subaks* son la expresión de las relaciones comunitarias en Bali. Legalmente reconocidos como una simple estructura de riego, los *subaks* son **un sistema milenario de creencias que orientan la manera como las personas se relacionan entre sí y con otras esferas de la vida.**

De este modo, los *subaks* no son únicamente canales de riego que proveen agua a los campos inundados de arroz o el cultivo de frutas y otros alimentos, estos también conectan los elementos que hacen del agua la religión de Bali: el tiempo, la tierra, el aire, los bosques, los cultivos, las danzas, las ofrendas, los templos. Los *subaks* son vividos por las comunidades y administrados por federaciones que se componen de líderes encargados de mirarlos de forma integrada.

Sin embargo, las amenazas a los *subaks* se vienen dando de forma intensa a lo largo de los últimos 50 años. En la década de 1970, el gobierno dictatorial de Suharto introdujo a la fuerza en Indonesia los paquetes de la “revolución verde”: los agricultores fueron obligados a utilizar nuevas semillas “mejoradas” de arroz, producidas por corporaciones que exigen dosis elevadas de fertilizantes y agrotóxicos. Los que se negaban a utilizar dichos paquetes iban presos. De este modo, el cultivo de las semillas tradicionales de Bali

entró en declive, junto a la contaminación del agua con productos químicos y la dependencia de las familias que pasaron a tener que comprar los insumos.

Por lo tanto, **la concepción sagrada de estos sistemas tradicionales afrontó la imposición de una “modernización de la agricultura” y, casi que en simultaneo, la proyección de Bali como un destino turístico.** Sectores económicos pasaron a codiciar sus mares, sus tierras y bosques y a transformar ese complejo sistema cultural y filosófico en algo que podría ser vendido como atracción turística.

Desde entonces, el mega-turismo viene provocando un aumento exponencial de la demanda de agua y la ampliación de las construcciones (rutas, hoteles, resorts, tiendas), promovidas de forma difusa por diversos inversionistas. Sin saneamiento, buena parte de los desechos de la alcantarilla se vierten directamente en los canales de los *subaks* que están distribuidos a lo largo de la isla. Estos también son utilizados para abastecer de agua a los pueblos y al riego de los campos seculares de arroz, que son el centro de la reproducción de la vida en las comunidades. En Bali, hay 17 nombres para el grano del arroz de acuerdo a las etapas, desde su plantación hasta llegar al plato de comida.

Al sur del volcán Batu Karu, en Jatiluwih, están los campos de arroz que se volvieron una atracción turística mundialmente conocida. Con más de 2 mil hectáreas, las semillas tradicionales balinesas son cultivadas en terrazas de arroz para la alimentación de las familias que viven de esto, en un sistema cultural integrado de 20 *subaks* unidos al bosque y al lago Tambligan y resguardados por una serie de templos, ubicándose el mayor de ellos en la cima del volcán. Sus terrazas inundadas, cuidadosamente diseñadas, hacen parte de uno de los patrimonios mundiales de la Unesco.

Su fama mundial, sin embargo, atrae a 160 mil turistas por año y pone a las comunidades ante una contradicción: **lo que podría ser una fuente de ingresos en realidad favorece a la apropiación de tierras y casas por parte de gente del exterior, así como a la reducción de agua disponible para los campos de arroz, especialmente en la estación seca.** Mientras las comunidades aguardan los recursos a través de la Unesco, no hay regulación para impedir la adquisición de tierras por parte de los inversionistas, poniendo en riesgo el modo de vida de las comunidades, su subsistencia y el propio patrimonio mundial.

Los Subaks resisten

A pesar de las imposiciones de la “revolución verde” y de las apropiaciones del área por inversionistas de la industria del turismo, **la agricultura tradicional es una estrategia para dar continuidad, para defender la posesión comunal de la tierra y restablecer la relación con lo sagrado.** En el distrito de Karangasem, al este de Bali, 214 familias se organizaron para producir arroz y otros cultivos de forma orgánica. El plan es volver a utilizar las semillas tradicionales de arroz balinés, que no requieren fertilizantes y pesticidas y que duran mayor tiempo después de la cosecha. Como diversos *subaks* comparten la misma fuente de agua, las familias saben que de usar productos químicos, no estarían contaminando solo su comunidad: **todo el sistema estaría afectado.**

“Según los antiguos habitantes, no podemos tomar el agua solo para nosotros, mucho menos para venderla. Igualmente sucede en la agricultura. Nosotros tomamos el agua prestada porque luego debemos devolverla tal como la encontramos. Todos los días hacemos ofrendas al agua, y el agua será dada si la respetamos”, explica DwiMardana,

agricultor de la comunidad Peladung, ubicada a los pies del volcán Agung. En su comunidad, la multinacional francesa de productos alimenticios Aqua Danone fue impedida de explotar la fuente de agua en 2010. En esta ocasión, las familias de agricultores, por votación, negaron la posibilidad de extraer el agua para embotellarla y comercializarla por parte de la empresa, aun cuando los jefes locales fueron favorables a la extracción.

La sacralidad del agua (de este modo, el agua no es un bien que se retiene ni una mercadería) se sobrepuso a las promesas de empleo y dinero presentadas por el gobierno y por la propia Aqua Danone, los cuales aceptaron hacer una votación porque estaban seguros de que tendrían el apoyo de la comunidad para su proyecto. Se equivocaron. En la confrontación de concepciones del mundo opuestas, venció la importancia por lo sagrado, enraizado en el día a día de las personas, una huella de su identidad. “El agua es nuestra religión y nuestra vida, por eso no es posible que alguien venga a perturbar eso”, sintetiza Dwi.

Adat: regulación comunitaria

En Bali, las comunidades tienen sus propios sistemas tradicionales de “regulación comunitaria”, conocidos como *adat*, basados en costumbres que pasan de generación en generación, y van por fuera de las leyes del Estado. El caso de la resistencia impuesta a las inversiones de Aqua Danone, en Peladung, demuestra la fuerza que esta regulación comunitaria puede tener y es uno de los ejemplos de la contradicción entre la lógica estatal y la lógica comunitaria.

Al suroeste del volcán Batu Karu, en el centro de la isla, Munduk, cuya existencia se remonta al siglo VIII, es una de las cuatro comunidades que protege el lago Tambligan y que demuestra cómo la “regulación comunitaria” puede impedir la apropiación de la vida por parte del turismo. Rodeada de bosques, la región es codiciada por empresarios y madereros. Sin embargo, cualquier actividad económica requiere el permiso de la comunidad.

En el siglo XIII, la comunidad que vivía a las orillas del lago decidió mudarse para la parte inferior de la montaña, destinando su antigua área rodeada de templos para protección. Allí, como en otras partes de la isla, la resistencia está unida a lo sagrado: **la comunidad posee su propio proyecto de protección del lago Tambligan, considerado fuente de vida, y por lo tanto ha negado repetidamente las embestidas de sectores económicos.**

A su vez, en el milenario Tenganan, protegido por montañas y símbolos de la resistencia balinesa contra las sucesivas invasiones de la isla, **una fuerte “regulación comunitaria” consigue imponer límites a la acción de la industria del turismo y detener la explotación maderera en 900 hectáreas de bosques.** A pesar de que estén habilitadas las visitas desde los años 1970, la comunidad, considerada la más antigua de Bali, tiene un código interno y sistemas de decisión que, como en Munduk, impiden las embestidas económicas.

En Tenganan, el *adat* tiene un conjunto de reglas y sanciones que los miembros de la comunidad deben seguir como protección de su cultura y su modo de vida, a pesar que pueden decidir recibir turistas y obtener un ingreso por turismo. La tierra, por ejemplo, no puede ser vendida y los turistas no pueden alojarse en la comunidad ni participar de

ceremonias sagradas. Los propios residentes de la comunidad no pueden tomar fotos de rituales. Los niños frecuentan la escuela fuera de la comunidad, pero también participan en el proceso educativo sobre la regulación interna.

El caso de la bahía Benoa

Las resistencias muestran que **la industria del turismo actúa de la misma manera que el modelo extractivo, amenazando a los medios de vida de las comunidades locales, con la cooptación de líderes y de la juventud. La colocación de tierras en el mercado global es un elemento importante en este proceso.**

Un claro ejemplo de esto es el gran proyecto en la bahía Benoa, en el extremo sur de la isla, donde se localiza el aeropuerto internacional de Denpasar por donde llegan los turistas. Este es el único lugar de Bali donde se puede ver la salida y la puesta del sol en el mar. Al final de su mandato, el ex-presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, firmó un decreto que convertía un área de conservación en un proyecto de “recuperación”. El actual gobierno de Joko Widodo continuó dicho proyecto.

El proyecto, que tiene atrás al Banco Mundial y a un gran grupo económico local liderado por el magnate Tomy Winata, el Tirta Wahana Bali Internacional, incluye la construcción de islas artificiales interconectadas por puentes para la ubicación de resorts y otros emprendimientos turísticos, además de un circuito de Fórmula 1. El proyecto promete miles de empleos. Sin embargo, la bahía Benoa abriga innumerables comunidades de pescadores que viven del mar y serían impedidas de acceder a sus templos, tierras y a la bahía, así como a sus barcos de pesca. Además, estas mismas comunidades viven de los manglares que no se encuentran contemplados en el proyecto de “recuperación”.

Frente a la amenaza de la pérdida del territorio de las comunidades y de la apropiación de tierras, además de la destrucción de los manglares, **se consolidó en Bali un gran movimiento de resistencia contra el proyecto de “recuperación” de la bahía.** Formado por habitantes de la isla, artistas y activistas, el ForBALI, Foro Balinés contra la Recuperación (*Balinese Against Reclamation Forum*, en inglés), ha conseguido posponer los planes del gobierno y del sector privado a través de protestas, reuniones con líderes locales y manifestaciones frente a los órganos públicos.

La resistencia en Bali se da por la articulación de ForBALI, por la fuerza de la tradicional “regulación comunitaria” o *adats*, por la vivencia de lo sagrado que se relaciona con los *subaks*, los bosques y el agua. A su vez, en pequeñas pero emblemáticas acciones: con la finalidad de esconder la belleza de sus campos de arroz, comunidades colocaron grandes carteles que impiden que turistas curiosos tomen fotos de sus vidas cotidianas en las plantaciones. Lo sagrado continúa resistiendo, oponiéndose a las concepciones de mundo representadas por la “revolución verde” y por el turismo que transforma todo en negocio.

Carolina Motoki, carolina [at] wrm.org.uy
Miembro del secretariado internacional de WRM

El proyecto REDD+ Envira en Acre, Brasil: promesas vacías galardonadas con nivel oro por los certificadores de carbono



"Sede forestal" del proyecto Envira Amazonia. Ph: WRM

El "Proyecto Envira Amazonia" es una de las tres iniciativas de compensación de emisiones de carbono forestal (REDD+) que la compañía estadounidense *CarbonCo LLC* lleva a cabo en el estado brasileño de Acre. La zona del proyecto abarca casi 40.000 hectáreas de selva amazónica y es parte de una propiedad de 200.000 hectáreas reclamada por la empresa *JR Agropecuária e Empreendimentos EIRELI*. No obstante, ese reclamo está en disputa. **Las familias recolectoras de caucho han vivido en esa tierra a lo largo de varias generaciones**, a pesar de que la mayoría no ha podido obtener títulos legales que confirmen sus derechos sobre la tierra. **El proyecto REDD+ amenaza el futuro de la comunidad** porque impone restricciones al uso de la tierra en el futuro e impide que las familias trabajen y reactiven los terrenos campesinos abandonados en la última década.

El principal propietario de la empresa brasileña involucrada en el proyecto REDD+ Envira Amazonia es Duarte José do Couto Neto. Do Couto Neto está involucrado en una serie de empresas (1) y en la década de 1990 fue candidato del partido ultraderechista Prona, en Acre. Recientemente, en septiembre de 2017, manifestó su apoyo al actual candidato presidencial de la ultraderecha en Brasil y a la dictadura militar, cuando declaró que añoraba el régimen militar ("*Saudades e muita do regime militar*"). (2)

Al igual que en la mayor parte de la Amazonía brasileña, **la tenencia de la tierra dentro de la zona del proyecto es complicada y controvertida**, pero no es algo que surja de la lectura del proyecto o de los documentos de certificación: allí se da por sentado el impresionante reclamo del propietario a las 200.000 hectáreas y no se mencionan las disputas existentes sobre la tierra. Tampoco los auditores los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB), que otorgaron el sello CCB al proyecto, cuestionan cómo una persona - en este caso Duarte José do Couto Neto - pudo adquirir legalmente una extensión tan enorme de tierras relativamente cercanas a la zona fronteriza con

Bolivia y Perú. Los caucheros han utilizado la tierra por generaciones y tienen derechos legales sobre la tierra que ocupan, aunque muy pocas familias poseen titularidad legal. **Aproximadamente 10 familias de caucheros poseen títulos de propiedad de la tierra dentro de las casi 40.000 hectáreas que conforman el proyecto REDD+ Envira Amazonia. Además, alrededor de 40 familias viven dentro del área circundante pero fuera del sitio del proyecto REDD+.** De acuerdo con los documentos del proyecto, éste alega proteger la totalidad de las 200.000 hectáreas y sugiere que estas comunidades que están fuera del área del proyecto también son beneficiarias, si bien no explica por qué están involucradas o cómo se ven beneficiadas.

En 2015, Imaflora, la empresa brasileña socia de *Rainforest Alliance*, certificó el proyecto REDD+ Envira Amazonia bajo los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB). Las evaluaciones para la certificación del Estándar de Carbono Certificado (VCS por su sigla en inglés, ahora llamada Verra) fueron realizadas por *Environmental Services Inc.* (3) En 2016, los certificadores emitieron el primer lote de créditos de carbono del proyecto, y un segundo lote de créditos de carbono fue emitido en noviembre de 2017. (4) La base de datos de VCS muestra que durante 2016/2017 se vendieron al menos 750.000 créditos de carbono del proyecto REDD+ Envira Amazonia. (5)

La comunidad ignora que el proyecto ya está vendiendo créditos de carbono

Cuando en marzo de 2018 el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) visitó a las familias que viven en las casi 40.000 hectáreas del sitio del proyecto REDD+ Envira Amazonia, **los miembros de la comunidad ignoraban que el proyecto había sido “aprobado” y que ya estaba vendiendo créditos de carbono.** Los residentes contaron que numerosos extranjeros habían estado en la zona en los años anteriores, pero pocos habían hablado con ellos y muchos no parecían hablar portugués. Habían realizado estudios y **una persona había visitado a cada familia individualmente para convencerlas de que apoyarían el proyecto de carbono.**

La mayoría de las familias había firmado un formulario que daba a entender que apoyaba el proyecto, o bien algunas familias habían sido fotografiadas recibiendo un kit dental. **Este kit dental contenía un pequeño tubo de pasta de dientes y un cepillo de dientes,** y hasta ahora ha sido, junto con la oferta de una visita gratuita a un dentista, el único beneficio tangible que recibieron los miembros de la comunidad.

Sobre la base de promesas (vacías) se emitió el certificado nivel oro del estándar CCB

Si bien los residentes no han visto ningún beneficio tangible más allá del kit dental y una visita única al dentista, fueron muchas las promesas que les hicieron cuando el proyecto se presentó a las familias. Los residentes confirmaron que esas promesas coinciden con las mencionadas en el documento del proyecto preparado para la certificación CCB: “Los propietarios también implementarán numerosas actividades para ayudar a las comunidades locales y mitigar las presiones de deforestación, tales como: ofrecer cursos de capacitación en extensión agrícola, comenzar a patrullar posibles sitios de deforestación en las primeras etapas del Proyecto, conceder a las comunidades locales la tenencia de tierras, y establecer actividades económicas alternativas, incluida la comercialización de plantas medicinales y *açaí*”. (6)

Imaflora otorgó un certificado CCB “Nivel oro” al proyecto REDD+ Envira Amazonia en 2015/2016, en función de las promesas que quien llevaba adelante el proyecto hizo a la comunidad. Pero **ninguna éstas se ha cumplido**. Como se mencionó anteriormente, los titulares del proyecto parecen no haber informado siquiera a la comunidad que el proyecto REDD+ ya había aprobado las evaluaciones de certificación y ya estaba vendiendo créditos de carbono. La publicidad del proyecto REDD+ Envira Amazonia también destaca los beneficios que el proyecto supuestamente aporta a la comunidad. Por ejemplo, un anuncio de carbonofund.org afirma: “Los proyectos y actividades sociales para mitigar las presiones de deforestación y beneficiar a las comunidades locales incluyen, pero no se limitan a: cursos de capacitación agrícola; patrullaje en bote de posibles sitios de deforestación; mejoramiento de escuelas locales y clínicas de salud; y desarrollo de infraestructura local para recolectar, transportar y vender *açaí*, plantas medicinales y caucho de origen local”. (7) Se incluyen imágenes de niños frente a la escuela comunitaria (que no ha funcionado durante los últimos dos años y está en mal estado de conservación) y una imagen de una reunión comunitaria dentro del edificio de la escuela para sugerir que se trata de un proyecto beneficioso para la comunidad local.

REDD+ Envira Amazonia: Restricciones, no beneficios, ésa es la realidad para las familias

Mientras que los titulares de los proyectos y los organismos de certificación crean la realidad virtual de que el proyecto REDD+ Envira Amazonia beneficia a las familias que habitan la zona del proyecto, lo real para la comunidad que vive ahí es similar a la realidad que enfrentan las comunidades afectadas por los otros dos proyectos REDD+ de *CarbonCo LLC*. en Acre: Purus y Valparaíso / Russas. (8) **Un propietario de tierras a gran escala con un título de la tierra cuestionable aprovecha la situación de tenencia insegura así como la ubicación aislada de la comunidad y utiliza su posición de poder sobre las familias para imponer restricciones al uso de la tierra, que probablemente aceleren un éxodo rural.**

El proyecto REDD+ Envira prohíbe el uso del bosque por parte de las familias caucheras fuera de las 150 hectáreas actualmente disponibles para cada una de las familias que viven dentro del sitio del proyecto. Por lo tanto, a los residentes no se les permite trabajar las parcelas recientemente abandonadas que fueron utilizadas por familias de recolectores de caucho hasta la década de los noventa. Esto forzaría a los jóvenes que se han criado en la zona y desean continuar el estilo de vida de sus padres como recolectores de caucho y campesinos, a abandonar la tierra y emigrar a la ciudad, donde las oportunidades de empleo serán escasas. **Los propietarios de tierras a gran escala continúan deforestando las áreas circundantes para dar lugar a la ganadería, pero a las familias de campesinos y recolectores de caucho se les niega la tierra que han utilizado durante generaciones para sus actividades de extracción de caucho y agricultura campesina.**

La realidad virtual de un proyecto REDD+ que proporciona beneficios “Nivel oro” a la comunidad creada por los anuncios en el sitio web de carbonfund.org y por los informes de la certificación, contrasta con la realidad en los hechos de promesas vacías y futuras restricciones al uso de la tierra que caracterizan al proyecto REDD+ Envira Amazonia.

Jutta Kill (jutta@wrm.org.uy)

(1) Los documentos de certificación incluyen una lista parcial de empresas y propiedades en Acre y Mato Grosso que aparentemente se monitorea como parte de la certificación del proyecto REDD+ (para evitar las llamadas fugas, es decir, el propietario que simplemente traslada su actividad ganadera a estas otras propiedades). Varias de las propiedades (por ejemplo, Seringal Canadá) que figuran en la lista forman parte de la enorme zona de 200.000 hectáreas de tierras de las cuales el proyecto REDD+ forma parte. Sin embargo, la lista parece estar incompleta y no incluye actividades en el estado de Amazonia a las que se refieren varios residentes de la zona. Por lo menos dos compañías en las que do Couto Neto figura como Socio no están en la lista: *Santa Cruz Da Amazonia Empreendimentos Ltda* y *Start Up Da Amazonia Projetos De Exploracao Sustentavel Ltda Me*.

(2) Comentario de Duarte José do Couto Neto al artículo 'General do exército bate forte no STF'

<https://www.blogdobg.com.br/general-do-exercito-bate-for-te-no-stf/>

(3) Los informes financieros de la organización sin fines de lucro Carbonfund.org muestran un pago de 136.802 dólares en 2015 a *Environmental Services Inc*. Los informes no explican si éste fue el costo de la validación y verificación del proyecto REDD+ Envira Amazonia para el estándar de carbono VCS. *CarbonCo LLC* es una subsidiaria de propiedad absoluta de la organización sin fines de lucro Carbonfund.org. El informe anual de Carbonfund.org Foundation 2016 está disponible en https://carbonfund.org/wp-content/uploads/2017/12/CF_AR_2016.pdf; los documentos presentados para obtener la exoneración del impuesto sobre la renta están disponibles en <https://carbonfund.org/about-us/>

4) Ver en http://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1382 la larga lista de documentos vinculados a los documentos de certificación VCS carbon y CCB de Verra.

(5) Enlace a la base de datos VCS / Verra: http://www.vcsprojectdatabase.org/#/vcus/p_1382

(6) Documento del proyecto Envira Amazonia preparado para la certificación CCB: http://verra.org/wp-content/uploads/2016/12/CCB_IMP_REP_SUM_ENG_DRAFT_1382_01JAN2015_31DEC2015_V1.pdf

(7) Anuncio de Carbonfund.org para el proyecto REDD+ Envira Amazonia:

<https://carbonfund.org/2016/12/12/envira-amazonia-project-acre-brazil-submitted-ccbs-public-comment-period-2/>

(8) Para obtener información sobre los impactos de estos proyectos en las comunidades que viven dentro de los sitios del proyecto REDD+ pueden consultar la publicación del WRM "*Considerações sobre um projeto privado de REDD no interior do Estado do Acre – Brasil*" <http://wrm.org.uy/books-and-briefings/observations-on-a-private-redd-project-in-the-state-of-acre-brasil/> / y C. Faustino y F. Furtado (2015): *Economia Verde, Povos das Florestas e Territórios: violações de direitos no estado do Acre Bericht für die Plataforma DHESCA Brasil*.

http://www.plataformadh.org.br/files/2015/08/economia_verde_relatorio.pdf

Brasil: El cerrado y la ciudad de Três Lagoas bajo el control de las papeleras



Mato Grosso do Sul, Brasil. Ph: WRM.

Cuando visitamos Três Lagoas, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, la presencia ostensiva de las empresas de celulosa y papel en todos los rincones de la ciudad llama mucho la atención. En los últimos años, la región cuenta con la mayor expansión de monocultivos de árboles de eucalipto en Brasil (1), los cuales fueron apropiándose no solo de las áreas ocupadas por otras actividades en el campo, sino también, de la cultura e imagen de la ciudad, de la política y de programas sociales.

En esta región, dos empresas son abastecidas por más de 500 mil hectáreas plantadas con eucaliptos y son representativas del poder económico del sector: Fibria, comprada por Suzano recientemente, con una capacidad total de producción de 3,25 millones de toneladas de celulosa por año solamente en las industrias de Três Lagoas; y Eldorado, que fue comprada en 2017 por Paper Excellence, y produce en el municipio cerca de 1,7 millones de toneladas de celulosa por año. Independientemente del nombre de la transnacional o del grupo económico nacional, **se trata de la expansión de un modelo de producción de gran escala que solo trae beneficios a las grandes empresas y perjudica a las comunidades rurales.**

Las empresas de celulosa llegan a esta región porque encuentran las condiciones más ventajosas y favorables para establecerse: precios bajos de la tierra, mucha tierra disponible en pocas manos, incentivos fiscales, legislación flexible, ausencia de movimientos sociales articulados y organizados que presenten resistencia. Y sobre todo, tienen la complicidad de los gobiernos que, como parte de un modelo de 'desarrollo', priorizan las 'grandes inversiones' en detrimento de los habitantes de los asentamientos de la reforma agraria, campesinos, indígenas y otras comunidades locales.

El WRM, en coordinación con el núcleo de estudios e investigación de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), realizó una visita a Três Lagoas y su región a fines de 2017. Además de la ciudad, visitamos varios asentamientos y comunidades

rurales, donde atestiguamos que las empresas tenían todas esas condiciones para establecerse con éxito. Un habitante del asentamiento declaró: **“Si la tierra da lucro para el grande, ¿por qué van a usarlo para los pequeños? Si pudieran, tomaban unos ganchitos y nos sacaban de aquí”**.

En este artículo mostraremos como la noción de lo público termina confundiéndose con la de lo privado, en un proceso que lleva a la población local a depender de las empresas en lo económico y simbólico, cultivando una perspectiva de que es imposible un cambio en el contexto actual.

Asentamientos: omisión y dependencia

En la región de Três Lagoas, el monocultivo de eucaliptos se expande sobre antiguas praderas de haciendas arrendadas a empresas de celulosa. Son los asentamientos de la reforma agraria con sus plantaciones y criaderos de animales que rompen la monotonía del paisaje repleto de plantaciones de árboles. A su vez, **las empresas avanzan en estos territorios con ‘planes de desarrollo’, compuestos por proyectos sociales que tienen asidero ante la omisión deliberada del Estado** en relación a la implantación de las políticas públicas que beneficien a la población.

Las familias acaban ‘dependientes’ de las empresas, ya sea por la participación en proyectos sociales, que van de la formación de profesores a cursos de agroecología y distribución de semillas e insumos; o por el hecho de que muchos habitantes para complementar los ingresos acaban trabajando en las plantaciones.

“Si alguien dice que vive del lote, no es cierto. El Inca (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) no nos dio nada; después las empresas llegaron y a partir de ahí no nos dio nada más. Nosotros estábamos aquí antes del eucaliptos, no en el asentamiento pero acampando, la lucha no va a retroceder”, relata un habitante.

El grupo de la UFMS llama a ese proceso de **“privatización de la reforma agraria”**. Son las empresas que acaban implantando proyectos que a veces hacen de ‘políticas públicas’. De esta forma, las empresas tienen control sobre los proyectos y consecuentemente ejercen una forma de control sobre los habitantes.

Los proyectos sociales son una de las principales herramientas de las empresas para cumplir dos objetivos: **neutralizar la resistencia de las comunidades, y obtener certificación forestal que les permita mostrarse comprometidos con propuestas ‘verdes’ y socialmente responsables**.

El silencio sobre los impactos provocados por las plantaciones se debe a que si las familias que viven en los asentamientos o los indígenas denunciaran los impactos, esto significaría la pérdida de acceso a beneficios y proyectos sociales que, en realidad, deberían ser derechos garantizados por parte del Estado.

Cercados por plantaciones de eucaliptos, los habitantes también sufren con la aplicación de productos químicos y con el ataque de animales a sus plantaciones, tales como el jabalí, tapir, guacamayo y tucán. En todas las comunidades, aparecen relatos de que estos animales atacan los cultivos porque fueron desterritorializados.

Un habitante declaró: **“la función social del asentamiento pasó a ser la de alimentar a los animales silvestres”**.

“Estamos enfrentando muchas dificultades para plantar debido a los bichos. Plantamos maíz y hay ataques de aves. Ya vi un tucán comiendo zapallo verde. No hay más frutas. Según las empresas, la orilla de los arroyos es preservada, pero no es así, no sobra nada para los bichos.”

Otra constatación de las comunidades, se refiere al impacto en los cursos de agua. Después de la llegada de las plantaciones a gran escala de eucaliptos, las comunidades afirman que el agua viene disminuyendo. **“Antes siempre había agua, ahora se acabó, se secaron los ríos y arroyos. Mi marido iba a pescar en lagos que ya no existen más.”** El bioma en la región es el *cerrado*, conocido como ‘tanque de agua’ o como ‘bosque boca abajo’. Las raíces profundas de los árboles colaboran con la capa freática, pero con las plantaciones esto no sucede pues ocurre todo lo contrario: éstas consumen inmensas cantidades de agua.

Expulsión del campo

Los cambios en el uso de la tierra debido a las plantaciones de eucaliptos generan muchos impactos: en las personas, en la flora y fauna, en el suelo y el agua. Antes de la llegada de las industrias de celulosa, la región era mayoritariamente ocupada por ganado. A pesar de que el modelo pecuario también es nocivo, comparativamente se nota un cambio negativo en las relaciones sociales en el campo. Los relatos apuntan a que muchas familias vivían en las antiguas haciendas donde por más que hubiera un integrante asalariado, podían plantar y tener animales para la leche y la carne. Con el arrendamiento de estas haciendas, las familias se vieron obligadas a mudarse para el núcleo urbano de Três Lagoas, donde deben vivir de los sueldos y comprar sus alimentos.

“En la ciudad hasta la papaya verde debemos comprar”.

“Había más empleo que con el eucalipto. Ahora en las haciendas arrendadas destruyeron hasta las casas. Las personas fueron obligadas a emigrar para buscar trabajo en otras regiones”.

Por lo tanto, hay una disolución del tejido social. Las personas que fueron para la ciudad casi no ven a sus hijos debido a las largas jornadas y a las distancias recorridas diariamente desde donde residen hasta donde se encuentran las posibilidades laborales: **“no se educa, no vemos el crecimiento de nuestros hijos, trae más pobreza y llena la periferia urbana”**.

Esta disolución impacta también a las escuelas del campo. Hay una rotación muy grande en el número de alumnos (en la escuela del distrito de Arapua, la rotación es de 50 alumnos por mes) y muchas unidades se cerraron por la reducción del número de alumnos. Esto se debe a la movilidad de los trabajadores y sus familias; por ejemplo, en el distrito de Garcias donde ya existió estación ferroviaria.

La rotación de alumnos convierte el día a día del equipo docente en algo difícil, afectando la calidad de la enseñanza. **“Es muy triste ver nuestra realidad.** Nuestra escuela que tenía un 100 por ciento de aprobación en las universidades públicas, el año pasado

tuvimos solamente dos alumnos en facultades privadas”, se desahoga una docente de Arapua.

¿Es posible resistir?

La presencia de las empresas está por todos lados: en las escuelas, en los medios de comunicación, en las actividades públicas. Con símbolos y propagandas se va creando una especie de ‘cultura del eucalipto’. Popularmente conocida como “Ciudad de las Aguas”, Três Lagoas ‘ganó’ en los últimos años, según las autoridades, el título de “Capital mundial de la Celulosa”, debido al crecimiento del sector y la transición de la actividad agropecuaria, la industrialización y las plantaciones de monocultivos de eucalipto en la región. (2)

Si la llegada de las empresas ‘mueve’ la economía, hay otros impactos negativos que muchas veces no son asociados a su implantación. Entre ellos, la explotación sexual de mujeres y niñas y los numerosos problemas laborales y de infraestructura en la ciudad y el campo, donde no están preparados para recibir al contingente de personas que son atraídas por la promesa de empleo de las industrias.

A simple vista, parece que ‘todo está perdido’, que las empresas tienen el control total del campo y la ciudad. Sin embargo, después de hablar con las comunidades campesinas, sentimos que las familias están conscientes de esto, pero intentan aprovechar los proyectos sociales para poder lograr su independencia.

A pesar de los pocos recursos que algunas familias recibieron por parte de las empresas (montos insignificantes que en todo caso deberían ser otorgados por el gobierno), estas fueron capaces de producir alimentos no solamente como una fuente de ingresos, pero ciertamente como una afirmación de su dignidad. Tomamos esto como una forma de resistencia, aunque aún sea silenciosa.

A su vez, en la UFMS existen investigaciones que enfatizan críticas al modelo de monocultivos de árboles a gran escala, que intentan plantear la discusión junto al gobierno y a la población de la ciudad sobre los impactos, impulsando, por ejemplo, debates y visitas de campo. Por otro lado, la UFMS viene promoviendo algunos proyectos para apoyar y fomentar la producción de los habitantes, como son las ferias en el predio de la Universidad o el proyecto de venta de bolsas con alimentos. Lo que está en cuestión son dos proyectos diferentes de presente y futuro para el campo y la ciudad de Três Lagoas.

Lizzie Díaz, lizzie [at] wrm.org.uy
Integrante del secretariado internacional del WRM

(1) Ver “Mato Grosso do Sul – a nova fronteira do eucalipto” en <https://wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim-do-wrm/secao3/brasil-mato-grosso-do-sul-a-nova-fronteira-do-eucalipto/>

(2) <http://www.treslagoas.ms.gov.br/a-cidade/>

ALERTAS DE ACCIÓN

¡Exijamos a la Agencia Sueca de Energía que suspenda los pagos futuros a la empresa Green Resources y cancele la compra de créditos de carbono!

Las actividades de Green Resources - empresa noruega dedicada a la plantación industrial de monocultivos de árboles y a negocios de compensación de emisiones de carbono - en Kachung y Bukalebahan, **Uganda**, han provocado la pérdida de tierras y de los medios de subsistencia de las comunidades locales de esos lugares. Su único comprador de créditos de carbono, la Agencia Sueca de Energía, suspendió en 2014 un acuerdo por cuatro millones de dólares hasta tanto se atendieran diez reclamaciones fundamentales vinculadas al proyecto. Mientras la Agencia evalúa si reanuda o no los pagos a Green Resources, los invitamos a sumarse a una petición del Instituto Oakland para reclamarle a la Agencia Sueca de Energía que suspenda todos los pagos futuros, ¡y cancele su acuerdo con Green Resources para la compra a futuro de créditos de carbono! Pueden enviar una carta a la Agencia Sueca de Energía (en inglés): <https://www.oaklandinstitute.org/demand-swedish-energy-agency-cancel-deal-green-resources>

India: ¡No más desalojos de las reservas de tigres!

Uniendo fuerzas de más de 70 aldeas diferentes, cientos de Baigas realizaron manifestaciones en marzo de 2018 para oponerse a los intentos de las autoridades de desalojar a dos comunidades Baiga de los bosques en los que han vivido y a los que han manejado desde tiempos inmemoriales, con la excusa de que se trata de un “corredor” de vida silvestre. Los Baiga están particularmente preocupados por dos próximos desalojos, porque tanto las autoridades estatales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) prometieron que no se realizarían desalojos en las áreas del “corredor” que se encuentran entre las reservas naturales protegidas. No obstante, los Baiga denuncian que han sufrido amenazas, intimidaciones y violencia hasta el punto que no han tenido otra opción que abandonar sus hogares. Estos desalojos son ilegales, tanto para la ley india como para el derecho internacional. **Exijamos al Ministro responsable que defienda la ley y detenga todos los desalojos que no cuenten con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades tribales afectadas. Pueden enviarle un correo electrónico en:** <https://www.survivalinternational.org/emails/tigers>

RECOMENDADOS

¿Quién nos alimentará?

Un informe del Grupo ETC realiza una comparación entre el sistema alimentario industrial y la agricultura campesina. La agricultura industrial recibe toda la atención (y la mayor parte de la tierra). Representa más del 80 por ciento de las emisiones de combustibles fósiles y utiliza más del 70 por ciento del suministro de agua utilizado en la agricultura, pero a cambio produce solo alrededor del 30 por ciento de los alimentos del mundo. Por el contrario, una red diversa de pequeños productores es la que está alimentando al 70 por ciento del mundo, incluidas las personas más hambrientas y marginadas. Pueden acceder al informe en: <http://www.etcgroup.org/es/node/5941>

Activistas finlandeses protestan contra las actividades de Stora Enso y Veracel en Brasil

En marzo de 2018, activistas de Amigos de Tierra Finlandia y de una asociación de solidaridad con los sin tierra en el mundo (Maattomien ystävät ry – en finlandés) hicieron una vez más una protesta en Finlandia durante la junta general de los accionistas de la empresa Stora Enso que, junto con la brasileña Fibria, son propietarias de Veracel Celulose en Brasil. Los manifestantes acusaron a Veracel de ocupar tierras ilegalmente y de promover la violencia al desalojar familias sin tierra de sus áreas con plantaciones de monocultivo de eucalipto. Las denuncias contra Veracel han sido constantes desde que la empresa se instaló en el Extremo Sur del estado de Bahía hace cerca de 25 años. Su historia está marcada por ilegalidades, degradación ambiental y violencia. El investigador finlandés Markus Kroger, que recientemente visitó la región, afirma que el problema de fondo es la producción centralizada a gran escala que necesita grandes áreas para producción en torno a una mega-fábrica de celulosa. Este modelo sólo dificulta aún más la vida de miles de personas en la región que luchan por la tierra, en un país que hasta hoy no ha hecho una reforma agraria profunda y aún no ha demarcado todas las tierras indígenas. Vea los artículos que salieron en la prensa finlandesa: http://www.iltalehti.fi/politiikka/201803282200844866_pi.shtml e <https://yle.fi/uutiset/3-10137268>

¿De dónde viene todo el oro procesado en Suiza?

Suiza es un país pobre en materias primas y, sin embargo, cada año, el 70 por ciento del oro extraído en el mundo se refina allí. Suiza alberga cuatro de las mayores refinerías del mundo. Pero, ¿de dónde viene todo ese oro procesado y comercializado en este país? La Sociedad para los Pueblos Amenazados (*Société pour les Peuples Menacés* - SPM), con sede en Suiza, exploró el comercio mundial de oro, siguiendo muy de cerca los casos de Perú, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Liberia y la República Democrática del Congo. El informe “*Switzerland, gold platform at risk?*” (Suiza, ¿la plataforma del oro en riesgo?) revela que existen serios riesgos de que algunas instalaciones suizas de procesamiento y comercialización del oro sean cómplices indirectos de los abusos contra los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. Pueden leer el resumen y acceder a la publicación en francés y alemán en: <https://www.gfbv.ch/fr/or-resume/>



Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos utilizando la siguiente fuente: **Boletín 237 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)**: “Luchas por la tierra, los bosques y la soberanía alimentaria” (<https://wrm.org.uy/es/>)

Suscríbete al Boletín del WRM

<http://wrm.us9.list-manage1.com/subscribe?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=9615b4bc94>

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques. La suscripción es gratuita.

Website: <http://wrm.org.uy/es/>

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Jutta Kill, Carolina Motoki y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Avenida General María Paz 1615 oficina 3. CP 11400, Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943 | wrm@wrm.org.uy - <http://wrm.org.uy/es/>